

El consultante se refiere a si es posible el tratamiento del dato personal del documento nacional de identidad DNI de las personas físicas en cuanto actúan y estampan su firma en los documentos contractuales de empresas, ya que aquellas personas físicas representan a estas en las citadas operaciones.

Y en relación con el tema suscitado, es de señalar:

1º).- La legislación protectora de datos de carácter personal – constituida en lo esencial por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (en adelante, la Ley Orgánica y el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, el Reglamento) – no extiende su protección a los tratamientos y ficheros de datos de carácter personal de las personas físicas de contacto de las personas jurídicas, esto es, a los datos de carácter personal identificativos de personas físicas que aparecen exclusivamente vinculados a la actividad y en el marco de una determinada organización empresarial.

Así se desprende del art. 2 – 2 del Reglamento, que establece:

*.Este Reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.*

Ahora bien – y respondiendo a lo que en último término, representa el principio de calidad de los datos, que en síntesis, impone su uso restrictivo – esta no protección se extiende únicamente a los referidos datos personales en cuanto se limiten a los de los afectados en su mera condición de cargos administradores o representantes de una empresa. Es decir, estos datos deberán referirse exclusivamente al entorno profesional del sujeto y a su actividad en el marco de su integración profesional en una persona jurídica. En ese sentido el tratamiento o inclusión en un fichero de los datos identificativos de una persona física debe ser “accesoria” de la finalidad perseguida por quien pudiera tratar el dato, cual es la de que se pueda identificar al interlocutor en las relaciones comerciales o profesionales que mantenga la empresa en la que dicho interlocutor o representante presta sus servicios.

Tales datos que en definitiva, podrían tratarse sin los condicionantes de la legislación protectora de datos de carácter personal, son los que recoge el precepto reglamentario antes transcrito, que vincula y relaciona directamente

aquellos datos a la actividad profesional y empresarial que la persona física desempeña para una organización profesional.

2º).- Supuesto ello, el número del DNI a que alude la consultante, por una parte y ello es obvio, no se encuentra incluido en los datos de carácter personal a que se refiere el precepto reglamentario; y por otra, tal dato tiene indudablemente el carácter de personal. La Ley Orgánica define los datos de carácter persona, en su art. 3 – a), como *“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

Por su parte, el Reglamento los define, en su art. 5 – 1 f), como *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

De acuerdo con estas definiciones, el número del DNI ostenta indudablemente el carácter de dato de carácter personal, estando destinado significativamente a identificar – por definición – a su titular.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de octubre de 2004 reconoce al DNI este carácter de dato de carácter personal.

Por lo que se viene diciendo, este dato personal está íntegramente sometido a la legislación protectora de los mismos y en concreto, a los efectos de que ahora se trata, a lo siguiente:

La utilización del DNI a que se refiere la consultante, implica un tratamiento de este dato personal, tratamiento que la Ley Orgánica define en su art. 3 -- c), *“como “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.”*

Por su parte, el Reglamento, en su art. 5 – 1 - t), lo define *“como cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.”*

Y si ello es así, resulta que el tratamiento del número del DNI, del que ya hemos dicho que sí está protegido por la legislación de datos, se ha de sujetar a lo previsto en el art. 6 de la Ley Orgánica, que es del siguiente tenor:

*1.- El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.*

*2.- No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.*

*3.- El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.*

*4.- En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.*

El art. 10 del Reglamento se manifiesta en términos semejantes.

3º).- De lo anterior se desprende que el tratamiento del dato del DNI, en el seno de la empresa en que presta sus servicios de representación la persona física titular de aquel, requeriría su “consentimiento inequívoco”, salvo que se estuviera en presencia de alguno de los supuestos respecto de los que el num. 2 del artículo, señala que no es preciso tal consentimiento.

Y entre aquellos supuestos se encuentra el relativo a “cuando [los datos] se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;...”

Pues bien, tal excepción a la necesidad de consentimiento concurre efectivamente en el caso que se contempla, en el que el tratamiento del número del DNI es necesario para:

El pleno desenvolvimiento de las relaciones jurídicas internas entre la persona física y la empresa a la que ha de representar, la cual ha de tener constancia indubitada de quien llevará a cabo su representación. Y además es

una garantía de identificación para la otra parte contratante respecto de quien efectivamente representará a la empresa con quien vaya a contratar.

4º).- El dato a que nos venimos refiriendo podrá ser pues, tratado como tal e incorporado a un posible fichero, cuyo responsable sería aquella empresa a la que la persona física titular del DNI preste sus servicios de representación. Tal fichero ha de sujetarse a las medidas de seguridad previstas al efecto en el art. 9 de la Ley Orgánica y en el título VIII de su Reglamento.

5º).- La consultante alude también al dato de la firma de quienes representan a las personas jurídicas en las operaciones antes señaladas.

A este respecto, es de señalar el importante principio de calidad de los datos, estampado en el art. 4 de la Ley Orgánica que, en sus apartados 1 y 2, y en cuanto ahora interesa, señala:

*Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.*

*Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.*

En términos semejantes, los apartados 2, 3 y 4 del art. 8 del Reglamento.

Dados los términos de estos preceptos, que en realidad informan toda la legislación de protección de datos, puede decirse, con los datos de que ahora se dispone, lo siguiente:

Un tratamiento específico de las firmas como tales, de las personas físicas firmantes-representantes de las empresas, podría admitirse en ciertos casos, en base al principio de calidad y proporcionalidad en el tratamiento de datos de carácter personal. Pero tales casos – que no deben ser la regla general – han de presentar unas características tales que permitan razonablemente concluir con que el tratamiento de la firma es necesario, a los fines pretendidos de representar debidamente y con garantías a la persona jurídica. En otro caso, un tratamiento del dato de la firma, que pudiera resultar generalizado e incondicionado, se presentaría como excesivo e innecesario.